



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

**DISTRITO JUDICIAL DE SINCELEJO
CIRCUITO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE
SINCELEJO**

**JUZGADO PRIMERO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE
SINCELEJO**

Sincelejo, Sucre, febrero diez (10) de dos mil veintiuno (2021)

SOLICITUD:	EXTINCIÓN DE LA A POR PENA CUMPLIDA
CONDENADO:	CERVANDO MANUEL ARRIETA CAMPO
DELITO:	PORTE ILEGAL DE ARMA DE FUEGO
RADICADO INTERNO NO.	2016-00404
RADICADO DE ORIGEN NO.	2012-00043

ASUNTO A TRATAR

Decidir la solicitud de libertad definitiva por pena cumplida, impetrada por el apoderado judicial **ROBINSON RIOS FUENTES**.

1. ANTECEDENTES PROCESALES

El señor **CERVANDO MANUEL ARRIETA CAMPO**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 92.546.056, expedida en Sincelejo, está condenado por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Chinu, Córdoba, mediante sentencia fechada diciembre 9 de 2015 a la pena principal de **NOVENTA Y NUEVE (99) MESES DE PRISIÓN** e inhabilidad para el ejercicio de los derechos y funciones públicas, como autor responsable de la comisión del delito de porte ilegal de arma de fuego, concediéndole prisión domiciliaria en sustitución de la prisión intramural.

Mediante auto fechado diciembre 13 de 2016, este despacho avoco el conocimiento y ordeno oficiar al Director del Establecimiento Penitenciario y Carcelario, para informarle que a partir de la fecha queda a disposición de este juzgado.

2. CONSIDERACIONES

El art. 1º de la Constitución Política consagra que nuestro país es un Estado social de derecho, fundado en el respeto de la dignidad humana, esto último establecido como una norma rectora de la ley sustancial penal y un principio rector de la Ley 65 de 1993.

Ahora bien, el inc. 3 del art. 28 de la Constitución Política establece que en ningún caso podrá haber penas y medidas de seguridad imprescriptibles, disposición que se complementa con el art. 34 de referida norma constitucional que prohíbe la pena prisión perpetua.

La Corte Constitucional en sentencia T-276 de 2016, respecto a la libertad personal señaló lo siguiente:

“(...) La libertad personal es un principio y un derecho fundante del Estado Social de Derecho cuya importancia se reconoce en diversas normas constitucionales: (i) en el Preámbulo de la Carta como uno de los bienes que se debe asegurar a los integrantes de la Nación; (ii) en el artículo 2º se establece como fin esencial del Estado el de garantizar la efectividad de los principios, y de los derechos consagrados en la Constitución, asignando a las autoridades el deber de protegerlos; y (iii) en el artículo 28 se consagra expresamente que “Toda persona es libre” y contempla una serie de garantías que buscan asegurar el ejercicio legítimo del derecho y el adecuado control al abuso del poder, como el derecho a ser detenido por motivos previamente definidos por el legislador y en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente.”

Esto es, la libertad proporciona una triple naturaleza jurídica, en el entendido en que al igual que la dignidad humana y la igualdad, la libertad tiene una naturaleza polivalente en el ordenamiento jurídico colombiano, pues se trata de manera simultánea de un valor, un principio y, a su vez, muchos de sus ámbitos son reconocidos como derechos fundamentales plasmados en el texto constitucional.

De esta manera, dada la prescriptibilidad de las penas, debemos llegar a la inexorable conclusión de que las mismas se extinguen, poniendo fin a la obligación del condenado de cumplir la pena que la ley señala por la infracción cometida, disposición constitucional que se encuentra acorde con los tratados internacionales de derechos humanos suscritos por Colombia que hacen parte del bloque de constitucionalidad y, que por ende, hace parte de nuestro ordenamiento jurídico¹.

Por su parte, el art. 3º del Código Penal, establece que la pena cumplirá las funciones de prevención general, retribución justa, prevención especial, reinserción social y protección al condenado, señalando el art. 10 de la Ley 65 de 1993, que el tratamiento penitenciario tiene la finalidad de alcanzar la resocialización del infractor de la ley penal, mediante el examen de su personalidad y a través de la disciplina, el trabajo, el estudio, la formación espiritual, la cultura, el deporte y la recreación, bajo un espíritu humano y solidario.

Respecto a este tópico, la Corte Constitucional en sentencia C-806 de 2002, M. P., Dra. Clara Inés Vargas Hernández, señaló lo siguiente:

“(...) La pena cumple una función de prevención especial positiva, es decir, debe entenderse que la pena debe, entre sus varias finalidades, buscar la resocialización del condenado, obviamente dentro del respeto de su autonomía y dignidad, pues el objeto del derecho penal en un Estado social de derecho no es excluir al infractor del pacto social, sino buscar su reinserción en el mismo.”

¹La Declaración Universal de Derechos Humanos como documento jurídico internacional y reconocedor de los mismos, hace referencia a tal derecho en su artículo 3, indicando que “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”. De igual manera, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en el artículo 9 numeral 1, expresa que “Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal. Nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por ley y con arreglo al procedimiento establecido en ésta.”

El anterior concepto tiene como fin último que el interno logre resocializarse y reintegrarse a la colectividad por medio de la construcción de un nuevo proyecto de vida.

De otro lado, el art. 7A de la Ley 65 de 1993, adicionado por el art. 5° de la Ley 1709 de 2014, establece que los Jueces de Penas y Medidas de Seguridad tienen el deber de vigilar las condiciones de ejecución de la pena y de las medidas de seguridad impuesta en la sentencia condenatoria.

El art. 88 del Código Penal consagra las causas de la extinción de la sanción penal en los siguientes términos:

“Artículo 88. Extinción de la sanción penal. Son causas de extinción de la sanción penal:

- 1. La muerte del condenado.*
- 2. El indulto.*
- 3. La amnistía impropia.*
- 4. La prescripción.*
- 5. La rehabilitación para las sanciones privativas de derechos cuando operen como accesorias.*
- 6. La exención de punibilidad en los casos previstos en la ley.*
- 7. Las demás que señale la ley.”*

Tenemos que las causas de la extinción de la sanción penal son aquellas específicas circunstancias que acaecen después de cometida la infracción, anulando la ejecución de la pena o extinguiéndola en caso de que se den cualquiera de los anteriores causales, lo que trae como consecuencia que para el sujeto activo de la conducta punible desaparece la obligación de soportar y tolerar la pena impuesta.

Ahora que, si bien es cierto, dentro de las seis (6) primeras causas de extinción de la sanción penal no se encuentra señalada la concerniente a la pena cumplida, resulta plausible y razonable que esta situación sea asumida como otra causal de extinción, habida cuenta que las consagradas en dicha disposición sustancial tiene los mismos efectos jurídicos, como son la de cesar el cumplimiento físico de la pena impuesta y el recobro la libertad en caso de que se encuentre restringida la misma, por lo que, de ampliarse la reclusión de quien ya cumplió su sanción resultaría contraria a sus garantías constitucionales y legales, pudiéndose en consecuencia encuadrar esta situación en la última causal de dicha disposición, esto es, las demás que señale la Ley, que para el caso sería traer a colación el contenido del numeral 1° del art. 317 de la Ley 906/04, que consagra como una causal de libertad, cuando se hay cumplido la pena según la determinación anticipada que para este efecto se haga, o se haya decretado la preclusión, o se haya absuelto al acusado.

3. CASO CONCRETO

Se observa en el caso de marras que al ciudadano **CERVANDO MANUEL ARRIETA CAMPO** lo capturaron el día once (11) de febrero de 2012, quedando a disposición del Juzgado Promiscuo Municipal de Sahagún, en turno URI con funciones de control de garantías, realizando las audiencias concentradas de legalización de captura, formulación de imputación y medida de aseguramiento.

Seguidamente, el día nueve (9) de diciembre de 2015, por parte del Juzgado Promiscuo del Circuito de Chinu, Córdoba, se profirió la sentencia condenatoria a la pena principal de **NOVENTA Y NUEVE (99) MESES DE PRISIÓN**, concediéndole la prisión domiciliaria al reo antes indicado.

Mediante escrito fechado enero 25 de 2021, se solicita por parte del togado la libertad inmediata e incondicional por pena cumplida, teniendo en cuenta que desde el día febrero 12 de 2011, fecha en que se llevaron a cabo las audiencias concentradas hasta el día de hoy (10 de febrero de 2021), han transcurrido **CIENTO SIETE (107) MESES** y **VEINTIOCHO (28) DIAS**, lo que nos indica que ha cumplido la totalidad de la pena impuesta, quien por demás habrá que señalarse que incumplió a cabalidad las obligaciones consagradas en el art. 38 del C.P. y en el acta de compromiso para disfrutar del beneficio de la prisión domiciliaria que le fue concedida por esta judicatura, puesto que no existe incidente alguno tendiente a la revocatoria de dicho mecanismo sustitutivo de la pena.

Líbrese la correspondiente boleta de libertad a su favor, por lo que se ordenará al EPMSC de Sincelejo a fin de que conceda la libertad inmediata de este condenado, haciéndole saber que solo podrá recobrar su libertad si no es requerido por otra autoridad judicial.

Como quiera que este condenado constituyó caución para gozar del beneficio de la prisión domiciliaria, no se ordenará la devolución de la caución prenda, toda vez que no se acredita en el expediente la consignación del importe o la constitución de Póliza de Seguro.

Notifíquese esta decisión al condenado, a su apoderado judicial, al Agente del Ministerio Público y al Establecimiento Carcelario de Sincelejo (Sucre).

Enviar por Secretaría las comunicaciones a las autoridades encargadas de llevar registros de anotaciones y antecedentes delictuales, para lo de su competencia.

Una vez ejecutoriada esta providencia, remítase el expediente al Juzgado Promiscuo del Circuito de Chinu, Córdoba.

Conforme lo advierte el art. 176 del Código de Procedimiento Penal, en contra de la providencia proceden los recursos de reposición y apelación.

En mérito de lo brevemente expuesto, el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Sincelejo,

RESUELVE:

PRIMERO: Declárese extinguida por pena cumplida a favor del PPL **CERVANDO MANUEL ARRIETA CAMPO** identificado con cédula de ciudadanía No. 92.546.058 expedida en Sincelejo (Sucre), la pena de noventa y nueve (99) meses de prisión impuesta por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Chinu, Córdoba, mediante providencia fechada diciembre 9 de 2015, toda vez que se ha cumplido la totalidad de la pena impuesta, tal y como se esbozó en la parte considerativa de esta providencia.

SEGUNDO: Líbrese la respectiva boleta de libertad a favor del PPL **CERVANDO MANUEL ARRIETA CAMPO** haciéndole saber al EPMSC de Sincelejo, Sucre que el condenado solo podrá recobrar su libertad si no es requerido por otra autoridad judicial.

TERCERO: No se ordenar la devolución a favor del PPL **CERVANDO MANUEL ARRIETA CAMPO**, la caución prenda, hasta tanto no se acredite por parte del interesado la consignación o depósito en su oportunidad de la suma fijada en el Banco Agrario.

CUARTO: TENGASE al doctor **ROBINSON RIOS FUENTES**, identificado con la cedula de ciudadanía No. 92.516.264 y portador de la T. P. No. 287.178 del C. S. J., para actuar en este proceso en los términos y con los fines del poder conferido.

QUINTO: REMITASE por Secretaría las comunicaciones a las autoridades encargadas de llevar registros de anotaciones y antecedentes delictuales, para lo de su competencia.

SEXTO: Notifíquese esta decisión al condenado, a su apoderado judicial, al Agente del Ministerio Público y al Establecimiento Carcelario de Sincelejo.

SEPTIMO: ENVIESE ejecutoriada esta providencia, el expediente al Juzgado Promiscuo del Circuito de Chinú, Córdoba.

OCTAVO: Contra esta decisión proceden los recursos de reposición y apelación.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



ARTURO GUZMAN BADEL
Juez